



INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “DIGITALIZACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA COPIA AUTÉNTICA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE DE VALORACIÓN DE LOS CENTROS BASES DE DISCAPACIDAD”

El Decreto 208/2021, de 1 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, atribuye en su artículo 15 las siguientes competencias a la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad:

- 1. El reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
- 2. La emisión de dictámenes e informes necesarios para la tramitación de prestaciones y la prestación de servicios especializados de atención básica en materia de información, orientación e intervención terapéutica.

Los procedimientos anteriormente expuestos, a tenor del Real Decreto 1979/1999, de 23 de diciembre, sobre el procedimiento para el reconocimiento y valoración de la discapacidad, están regulados supletoriamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la que deben adecuarse en lo que se refiere a la tramitación del expediente administrativo.

No obstante, esta última ley, exige y recoge una serie de consideraciones y de obligaciones para garantizar la implantación del expediente administrativo electrónico, que se está llevando a cabo de forma paulatina.

El sistema informático “Reconocimiento Grado de Discapacidad” RGM, implementado por el Ente Público de Derecho, Agencia Madrileña para la Administración Digital alberga los expedientes de valoración de la discapacidad de todos los usuarios de la C. Madrid.

Progresivamente, este aplicativo ha ido incluyendo las exigencias que, a través de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico y las leyes que le sucedieron, fueron estableciendo.

Para poder hacer realidad el expediente administrativo electrónico en su integridad, 100% en formato digital, resulta imprescindible proceder a la digitalización de los expedientes que total o parcialmente, están contenidos en formato papel, o mixtos (parcialmente en papel y parcialmente en electrónico).

En la actualidad, se ha calculado aproximativamente que el volumen de expedientes que parcial o totalmente están en formato papel asciende a 789.000 expedientes, con una dimensión de unas 100 páginas de media por expediente.

Esta labor de digitalización y copia auténtica, en la que no sólo se procede al escaneo de la documentación, sino a la elaboración de una copia auténtica, en los términos que establece el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, así como el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se aprueba el Esquema Nacional de Interoperabilidad. A mayor abundamiento, se ha de considerar que la certificación de la copia auténtica sólo puede ser emitida tras la elaboración del documento electrónico, con un sellado o firma digital que cumpla con los requisitos mínimos del ya referenciado Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Gracias al Reglamento Europeo 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se ha obtenido a través del Convenio suscrito entre el



Ministerio de Agenda 2030 y Bienestar Social con la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, de 13 de diciembre de 2021, la aprobación de un subproyecto, dentro del proyecto “Modernización de los Servicios Sociales” para la “Digitalización de los expedientes de los centros bases”.

Esto es, el contrato objeto de la presente memoria se financia íntegramente con cargo a los fondos europeos, debiéndose en todo momento cumplir los requisitos que en la materia establezca tanto la UE como la Administración General del Estado.

Si consideramos desde el punto de vista práctico los trabajos a realizar, de escaneo, verificación y certificación, todas estas tareas resultan inapropiadas y no corresponden con las funciones que tienen atribuidas el personal al servicio de los centros bases. Asimismo, se requieren un tratamiento unificado e integral, con los medios profesionales, técnicos e informáticos que garanticen la autenticidad, la fiabilidad, la uniformidad y calidad del producto resultante. Todo ello, sólo puede obtenerse mediante un proyecto diferenciado y singularizado, con financiación y personal cualificado ad hoc.

Las actividades que en este contrato se relacionan, no guardan ninguna identidad con las tareas que tienen atribuidas el personal, ni tan siquiera administrativo, que se halla adscrito a los centros bases de la discapacidad ni a la subdirección general de valoración de la discapacidad y atención temprana. Máxime aún, el desarrollo de estos trabajos, a falta de equipamiento tecnológico básico de escaneo y verificación digital, no pueden ser realizados en las dependencias ni en las sedes de la Administración contratante, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

Además, es claro que es un objetivo único y diferenciado, de carácter coyuntural y transitorio puesto que, una vez realizada la copia auténtica documental, se pretende que se interconecte o incluya en RGM, para que de esta forma pueda permitir a los profesionales tener en formato electrónico todos los expedientes anteriores, funcionando en su totalidad de forma digital desde la plena digitalización del expediente en papel.

Paralelamente, se está trabajando para obtener las autorizaciones pertinentes con el fin de remitir, conforme la Ley 9/1993 de Archivos de la Comunidad de Madrid, los expedientes en formato papel al Archivo Central. de esta forma, quedará íntegramente implantado el expediente electrónico de la discapacidad.

De todo lo anterior, se deduce que el objeto del contrato de servicios está perfectamente deslindado de la actividad ordinaria que se desarrolla en los centros bases de discapacidad, no siendo posible su asunción, por falta de cobertura legal, técnica y organizativa, por la plantilla adscrita a los mismos. Es más, de conformidad con el art. 308.2 de la LCSP, en ningún caso las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato podrán consolidarse o aspirar a ser reconocidos como personal propio del organismo contratante.

Madrid, a fecha del día de la firma

EL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

